

English below / Français suit

Carta abierta de la Delegación de la Sociedad Civil de Canadá a las comunidades mexicanas y los trabajadores afectados por las empresas mineras canadienses - Febrero 2013

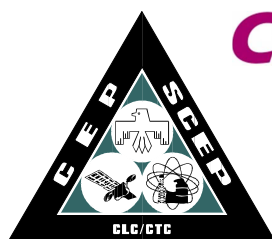
Contexto

Del el 1 al 21 de febrero del 2013, nueve sindicalistas y representantes de la sociedad civil canadiense participaron en una delegación de solidaridad e investigación para conocer de primera mano sobre el impacto de las empresas mineras Canadienses en los trabajadores y las comunidades en México. La delegación, con un equilibrio de género, estaba compuesta de representantes del sindicato Steelworkers (USW), incluyendo activistas de una mina de níquel en el norte de Quebec (Raglan Xstrata) y una mina de carbón en Elkford, British Colombia (Teck), el Sindicato de Comunicación, Energía y Trabajadores del Papel de Canadá (CEP), el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), y Kairos: Iniciativas de Justicia Ecuménica Canadiense. Los sindicatos representados incluyen el mayor sindicato del sector público en Canadá, y dos de los sindicatos más grandes del sector privado, lo cual en conjunto representan a la mayoría de los trabajadores del sector extractivo en Canadá.

En la Ciudad de México, la delegación se reunió con representantes de REMA - Red Mexicana de Comunidades Afectadas por la Minería, ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y la dirección nacional de Los Mineros (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republica Mexicana). La delegación luego se dividió en dos partes.

Un grupo visitó el estado de Durango y se reunió con los dirigentes y los miembros del Ejido de La Sierrita y la Sección 309 de Los Mineros donde la empresa minera canadiense Excellon Resources opera su mina de plata Platosa.

La delegación entrevistó a trabajadores quienes alegan que fueron despedidos por Excellon Resources porque estaban ejerciendo su derecho a afiliarse a un sindicato democrático, así como la viuda de Paulin Contreras - un trabajador muerto al trabajar en la mina Excellon en 2010. La delegación también entrevistó ejidatarios individuales de La Sierrita y Banco Nacional. Los trabajadores y los miembros de la comunidad denunciaron la ruptura por parte de Excellon de acuerdos con el sindicato de Los Mineros y ejidatarios comunales.



CUPE·SCFP



El segundo grupo visitó el estado de Oaxaca y se reunió con una serie de organizaciones y grupos de la comunidad, que incluyeron el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, los líderes comunitarios y activistas en Calpulalpam, donde las empresa minera canadiense Continuum Resources se vió obligada a cerrar debido a daños al medio ambiente en la comunidad, y CPUVO (Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán) en San José del Progreso, donde la minera canadiense Fortuna Silver opera. La delegación escucho sobre presuntos casos de corrupción, daño ambiental, asesinatos y abuso físico. El grupo también se reunió con miembros de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y uno de los tres sacerdotes que PBI ha acompañado en los últimos años, el Padre Martín Octavio García Ortiz, víctima de violencia física por su participación en un proyecto medioambiental en San José del Progreso. Por último, la delegación se reunió con el Subsecretario de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca, Hugo Aguilar Ortiz.

La delegación solicitó entrevistas con los representantes de Excellon Resources y Fortuna Silver. Excellon Resources rechazó la petición, tanto por escrito antes de la llegada de la delegación de México y de nuevo cuando se solicitó a la puerta de la mina La Platos. Fortuna Silver nunca respondió.

Después de las visitas, la delegación se reunió con funcionarios de la Embajada de Canadá en México para informar sobre sus observaciones y expresar sus preocupaciones por la profunda falta de respeto por parte de Excellon Resources y Fortuna Silver hacia los trabajadores y las comunidades en las que operan.

La delegación planeó escribir un informe sobre sus hallazgos, y así lo hará. Sin embargo, al final de la visita de 10 días, la delegación también decidió escribir una carta abierta a los miembros de la comunidad, los ejidatarios y los trabajadores en México quienes han sido afectados por las operaciones de las empresas mineras canadienses, y en particular a las comunidades y los trabajadores visitados en Durango y Oaxaca.

Carta Abierta de los Miembros de la Delegación 2013

Nuestra visita con ustedes ha provocado muchas emociones.

En primer lugar, estamos profundamente agradecidos por el tiempo que pasaron con nosotros, la calidez con la que nos recibieron, y la honestidad, la franqueza y el respeto con el que nos recibieron. Nos honra su espíritu de generosidad.

Estamos profundamente conmovidos y emocionados hasta las lágrimas por sus testimonios del impacto que las operaciones de las empresas mineras Canadienses tienen en ustedes. Después de escuchar sus historias, no cabe duda en nuestras mentes que se han habido violaciones de derechos humanos en Durango y Oaxaca.

Nos entristece que las esperanzas y los sueños de muchos de ustedes que la minería

traería puestos de trabajo y una vida mejor para ustedes y sus hijos se hayan desvanecido. En lugar de oportunidades, la minería ha traído división de la comunidad, conflicto y violencia. El acceso al agua limpia, tan críticamente importante para sus comunidades, ha sido interrumpido. Tanto han sido traicionadas sus esperanzas, que muchos de ustedes nos han dicho que ya no quiere tener nada que ver con la minería. Otros, habiendo oído hablar de experiencias negativas con la minería en otras comunidades, rechazan la minería desde el principio. Lo único que quieren es que las compañías mineras y de exploración canadienses se queden en casa y les dejen en paz.

Lamentamos que el tipo de respeto que ustedes nos han demostrado no ha sido correspondido por las empresas mineras que tienen su sede en nuestro país, y han obtenido capital en los mercados ubicados en nuestro país. En su lugar, estas empresas, en particular Fortuna Silver y Excellon Resources, han mostrado una profunda falta de respeto. Para nosotros, no se comportan de una manera que, nosotros como canadienses, esperaríamos. En el caso de Excellon, la compañía ha traicionado la confianza de la comunidad por no cumplir con muchas de las disposiciones que se acordaron en el contrato de arrendamiento de 2008, entre la empresa y el Ejido La Sierrita. En nuestra experiencia, una empresa canadiense que no cumplió con los términos de un acuerdo de beneficio de impacto firmado con una comunidad en Canadá, se enfrentaría prontamente a las consecuencias, y encontraría que no sería capaz de continuar sus operaciones.

Nos preocupa la dificultad que tienen los trabajadores y las comunidades en hacer rendir cuentas a las compañías y otros agentes responsables. ¿Cómo es posible que Excellon Resources sea capaz de despedir a casi 50 trabajadores simplemente por querer unirse a un sindicato democrático, que podría obligar a mejoras en la salud y la seguridad en la mina? ¿Cómo se puede Excellon hacer eso y no enfrentar ninguna consecuencia, dejando a los mineros sin trabajo durante más de siete meses? ¿Cómo puede seguir sin resolverse la pérdida de vidas en la comunidad de San José del Progreso? Las personas que murieron estaban defendiendo sus derechos fundamentales a la tierra y el acceso al agua.

Una y otra vez hemos escuchado historias de la incapacidad de los funcionarios del gobierno Mexicano en todos los niveles para proteger a los trabajadores y las comunidades, la aplicación efectiva de la legislación, y de investigar adecuadamente los accidentes de trabajo e incidentes de violencia. Los procesos legales que pudieran hacer justicia para los trabajadores y las comunidades parecen complicados, sujetos a la corrupción, el soborno y la presión política. Los procesos legales son marcados por largas demoras. La justicia demorada es justicia denegada. Está claro para nosotros que los trabajadores mexicanos y las comunidades no pueden acceder fácilmente a los mecanismos legales que les permitan hacer valer sus derechos o recibir una compensación por las violaciones de sus derechos.

Esta brecha debe ser atendida. Creemos que el gobierno de Canadá puede y debe

implementar un procedimiento de quejas para la comunidad y los trabajadores para las quejas contra las empresas mineras Canadienses, el cual permita una investigación adecuada e incluya medidas de cumplimiento (en lugar del mecanismo de denuncia voluntaria actualmente en vigor con la Oficina del Consejero de Extractivas). Además, Canadá debe de facilitar a las personas que han sido afectadas por la minería Canadiense a demandar por la indemnización de daños y perjuicios en los tribunales Canadienses.

Aplaudimos su determinación de crear oportunidades económicas alternativas, de modo que ustedes no tienen que ser dependientes de la minería. Calpulalpam en particular nos impresionó por su cohesión de la comunidad, claridad de propósito, creatividad y la diversidad de iniciativas.

Nos sentimos inspirados por su solidaridad y coraje, mientras se apoyan unos a otros en circunstancias en las que parece que las empresas tienen todo el poder, donde la presión económica y política se aplica en su contra en un esfuerzo para debilitar y hacer sus reclamos legítimos invisibles para el mundo.

Nos preocupa que las experiencias que han compartido con nosotros acerca del comportamiento de las empresas mineras Canadienses en Oaxaca y Durango no sean casos excepcionales, sino que, por el contrario, son parte de un patrón más amplio a lo largo de todo México. De hecho, aunque no tuvimos la oportunidad de ver por nosotros mismos lo que está sucediendo en otros lugares, si escuchamos las presentaciones de Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, y estamos conscientes de los casos de Chiapas y Chihuahua.

Al considerar qué estrategias pueden estar abiertas a nosotros para abogar por el cambio, reflexionamos sobre el hecho de que muchos de nosotros pertenecemos, y contribuimos a fondos de pensiones que tienen acciones en compañías mineras Canadienses. ¿Tememos una responsabilidad y una oportunidad de seguir una estrategia de activismo de accionistas para abogar por cambios en las prácticas de las compañías mineras? ¿Sería ésta una manera de promover la implementación de políticas y procedimientos proactivos que respeten los derechos de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado?

Para las ONG, tales como ProDESC, que han asumido la lucha por la justicia y el respeto de los trabajadores y las comunidades y la han hecho suya - ustedes tienen nuestra admiración, respeto y apoyo.

Para los dirigentes de Los Mineros que a diario se enfrentan a la violación sistemática de los derechos laborales en docenas de lugares de trabajo en todo México, pero que sin embargo continúan sintiendo el sacrificio de cada uno de los miembros de la Sección 309 despedidos - sabemos que van a continuar su lucha por sus miembros. Seguimos de pie con ustedes.

Estamos enfurecidos. Estamos enfurecidos porque las operaciones de las empresas mineras Canadienses que fueron el foco de nuestro viaje, han tenido un impacto tan negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades Mexicanas.

Al regresar a Canadá tomamos todas estas emociones con nosotros. Tomamos nuestra indignación, nuestra tristeza y nuestra ira. Añadimos a esto sus esperanzas, valentía y determinación. Y con todos ellos vamos a encontrar la manera de actuar, para asegurar que sus luchas no sean invisibles al compartir sus historias, para asegurar de que sus derechos no puedan ser ignorados, y para asegurar que los trabajadores y las comunidades sean capaces de construir sus victorias.

Joshua Berson
Marlyne Lachine
Doug Olthuis

Rob Halldorson
Walter Manning
Sharlene Patterson

Shaheen Hirani
Janette McIntosh
Laura Ramirez

El 28 de febrero, 2013

Open letter to Mexican communities and workers affected by Canadian mining companies from Canadian Civil Society Delegation – February 2013

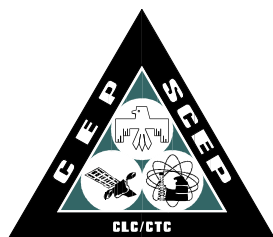
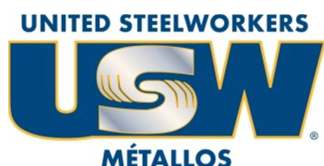
Context

From February 11 to 21, 2013 nine Canadian trade unionists and civil society representatives participated in a solidarity and fact-finding delegation to learn first-hand about the impact of Canadian mining companies on workers and communities in Mexico. The gender-balanced delegation was made up of representatives from the United Steelworkers Union (USW), including activists from a nickel mine in northern Quebec (Raglan Xstrata) and a coal mine in Elkford, British Columbia (Teck), the Communication, Energy and Paperworkers Union of Canada (CEP), the Canadian Union of Public Employees (CUPE), and Kairos: Canadian Ecumenical Justice Initiatives. The unions represented include the largest public sector union in Canada, and two of the largest private sector unions, which together represent the majority of workers in the extractive sector in Canada.

In Mexico City, the delegation met with representatives from REMA – Mexican Network of Mining-Affected Communities, ProDESC (Project for Economic, Social and Cultural Rights), and the national leadership of Los Mineros (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republica Mexicana). The delegation then divided into two parts.

One group visited the state of Durango and met with the leadership and members of the Ejido of La Sierrita and Section 309 of Los Mineros where the Canadian mining company Excellon Resources operates its La Platosa silver mine.

The delegation interviewed individual workers who allege that they were terminated by Excellon Resources because they were exercising their rights to join a democratic trade union, as well as the widow of Paulin Contreras – a worker killed in the Excellon mine in 2010. The delegation also interviewed individual Ejido landowners from La Sierrita and Banco Nacional. Workers and community members denounced Excellon's breaking of agreements with the Los Mineros miners' union and communal landowners.



CUPE·SCFP



The second group visited the state of Oaxaca and met with a number of organizations and community groups, which included the Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, community leaders and activists in Calpulalpam, where the Canadian mining company Continuum Resources was forced to shut down due to environmental damage in the community, and CPUVO (Coordinating Committee of the United Peoples of the Ocotlan Valley) in San José del Progreso, where Canadian mining company Fortuna Silver operates. The delegation heard of controversial cases of corruption, environmental damage, murders and physical abuse. The group also met with members of Peace Brigades International (PBI) and one of three priests that PBI has accompanied in the last few years, Father Martin Octavio Garcia Ortiz, a victim of physical violence because of his involvement in an environmental project in San José del Progreso. Finally, the delegation met with the Sub-Secretary of Indigenous Rights of Oaxaca State, Hugo Aguilar Ortiz.

The delegation requested interviews with representatives of Excellon Resources and Fortuna Silver. Excellon Resources rejected the request both in writing prior to the delegation's arrival in Mexico and again when a request was made at the La Platosa mine gate. Fortuna Silver never replied.

Following the visits, the delegation met with officials in the Canadian Embassy in Mexico to report on its observations and convey its concerns with the profound lack of respect shown by Excellon Resources and Fortuna Silver for the workers and communities in which they operate.

The delegation planned to write a report on its findings, and it will do so. However at the end of the 10-day visit, the delegation also decided to write an open letter to community members, landowners, and workers in Mexico who have been affected by the operations of Canadian mining companies, and in particular to the communities and workers it visited in Durango and Oaxaca.

The Open Letter from the Members on the 2013 Delegation

Our visit with you has triggered many emotions.

First, we are profoundly thankful for the time you spent with us, the warmth with which you greeted us, and the honesty, openness and respect with which you received us. We are humbled by your spirit of generosity.

We are deeply touched, and moved to tears by your testimony of the impact on you of the operation of Canadian mining companies. After listening to your stories, there is no doubt in our minds that there have been human rights violations in Durango and Oaxaca.

We are saddened that your hopes and dreams of many of you that mining would bring jobs and better lives for you and your children have been dashed. Instead of opportunity, mining has brought community division, conflict, and violence. Access to clean water, so critically important to your communities, has been disrupted. So badly have your hopes been betrayed that many of you have told us that you no longer want anything to do with mining. Others, having heard about negative experiences with mining in other communities, reject mining from the outset. You just want Canadian exploration and mining companies to stay home, and leave you alone.

We are sorry that the kind respect you have shown us has not been reciprocated by mining companies that are based in our country, and raise capital on markets located in our country. Instead these companies, in particular Fortuna Silver and Excellon Resources, have shown you a profound disrespect. To us they are not behaving in ways that we, as Canadians, would expect. In the Excellon case, the company has betrayed the trust of the community by not living up to many of the provisions it agreed to in the 2008 lease agreement between the Company and the Ejido La Sierrita. In our experience, a Canadian company that did not abide by the terms of a signed impact benefit agreement with a community in Canada would quickly face consequences, and would find it is unable to continue to operate.

We are troubled by the difficulty workers and communities have in holding companies and other actors accountable. How is it possible that Excellon Resources is able to terminate the employment of close to 50 workers simply for wanting to join a democratic union that might force improvements in health and safety in the mine? How can Excellon do that and face no repercussions, leaving miners without work for more than seven months now? How can the loss of lives in the community of San José del Progreso remain unresolved? The people who died were defending their basic rights to their land and access to water.

Time and time again we heard stories of the failure of Mexican government officials at all levels to protect workers and communities, to effectively enforce legislation, and to properly investigate workplace accidents and incidents of violence. Legal processes that might bring justice to workers and communities appear complicated, subject to corruption, bribery, and political pressure. Legal processes are marked by long delays. Justice delayed is justice denied. It is clear to us that Mexican workers and communities cannot easily access legal mechanisms that would allow them to assert their rights or receive fair recompense for the violations of their rights.

This gap must be addressed. We believe that the Canadian government can and should implement a community and worker complaints procedure for complaints against Canadian mining companies that allows for proper investigation and includes compliance measures (rather than the voluntary complaints mechanism currently in place with the Office of the Extractive Counsellor). Further Canada must make it easier for individuals who have been harmed by Canadian mining to sue for compensation and damages in Canadian courts.

We applaud your determination to create alternative economic opportunities, so that you need not be dependent on mining. Calpulalpam in particular impressed us for its community cohesiveness, clarity of purpose, creativity and diversity of initiatives.

We are inspired by your solidarity and courage as you stand with each other in circumstances where it appears that the companies hold all the power, where economic and political pressure is applied against you in an effort to weaken you and make your legitimate claims invisible to the world.

We are worried, that the experiences you shared with us about Canadian mining companies' behaviour in Oaxaca and Durango are not exceptional cases, but that, on the contrary, are part of a larger pattern throughout all of Mexico. Indeed, although we did not have the opportunity to see for ourselves what is happening elsewhere we did hear presentations from Guerrero, Veracruz, and San Luis Potosi, and are aware of cases in Chiapas and Chihuahua.

As we consider what strategies may be open to us to advocate for change, we reflect on the fact that many of us belong to, and contribute to, pension funds that own shares in Canadian mining companies. Do we have a responsibility and an opportunity to pursue a strategy of shareholder activism to advocate for changes in the practises of mining companies? Would this be one way to promote the implementation of proactive policies and procedures that would respect the rights of indigenous communities to free, prior, and informed consent?

To the NGO's, such as ProDESC, who have taken the struggle for justice and respect of workers and communities, and made it their own – you have our admiration, respect, and support.

To the leadership of Los Mineros who daily face the systematic violation of labour rights in dozens of workplaces across Mexico, but who nevertheless continue to feel the sacrifice of each one of the terminated Section 309 members – we know you will continue your fight for your members. We continue to stand with you.

We are angry. We are angry that the operations of the Canadian mining companies that were the focus of our trip have had such a negative impact on the labour and human rights of Mexican workers and communities.

As we return to Canada we take all of these emotions with us. We take our outrage, our sadness, and our anger. We add to that your hope, your courage, and your determination. And with all of these we will find ways to act, to make sure that your struggles are not invisible by sharing your stories, to make sure that your rights cannot be ignored, and to make sure that workers and communities are able to construct their victories.

Joshua Berson
Marlyne Lachine
Doug Olthuis

Rob Halldorson
Walter Manning
Sharlene Patterson

Shaheen Hirani
Janette McIntosh
Laura Ramirez

February 28, 2013

Lettre ouverte de la Délégation de la société civile canadienne aux collectivités et travailleurs mexicains touchés par les sociétés minières canadiennes – février 2013

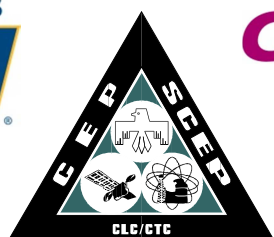
Contexte

Du 11 au 21 février 2013, neuf syndicalistes et représentants canadiens de la société civile ont participé à une délégation de solidarité et d'enquête factuelle pour découvrir de première main les répercussions des activités des sociétés minières canadiennes sur les travailleurs et les collectivités du Mexique. La délégation, qui se composait d'un nombre égal de femmes et d'hommes, comprenait des représentants du Syndicat des Métallos, entre autres, des militants d'une mine de nickel du Nord du Québec (Raglan Xstrata) et d'une mine de charbon à Elkford, en Colombie-Britannique (Teck), du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et de Kairos : Initiatives canadiennes œcuméniques pour la justice. La délégation représentait, entre autres, le plus important syndicat du secteur public au Canada et deux des plus importants syndicats du secteur privé qui, ensemble, représentent la majorité des travailleuses et travailleurs du secteur de l'extraction au Canada.

Dans la ville de Mexico, la délégation a rencontré des représentants de REMA – Réseau mexicain des collectivités touchées par l'industrie minière, de ProDESC (Projet pour les droits économiques, culturels et sociaux), et les dirigeants nationaux de Los Mineros (Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la sidérurgie et industries connexes de la République mexicaine). La délégation s'est ensuite divisée en deux groupes.

Le premier groupe a visité l'État de Durango et a rencontré des dirigeants et des membres de l'Ejido de La Sierrita et de la section locale 309 de Los Mineros, où la société minière canadienne Excellon Resources exploite sa mine d'argent La Platosa.

La délégation a interviewé des travailleuses et travailleurs individuels qui disent avoir été congédiés par Excellon Resources parce qu'ils exerçaient leurs droits de se joindre à un syndicat démocratique, ainsi que la veuve de Paulin Contreras – un travailleur qui a perdu la vie en travaillant à la mine d'Excellon en 2010. Elle a également interviewé des propriétaires individuels de l'Ejido de La Sierrita et de Banco Nacional. Des travailleurs et des membres de la collectivité ont dénoncé le non-respect par Excellon des ententes qu'elle avait conclues avec Los Mineros, le syndicat des mineurs, et les propriétaires de terres communales.



CUPE·SCFP



Le deuxième groupe a visité l'État d'Oaxaca et a rencontré un grand nombre d'organisations et de groupes communautaires, dont Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, des dirigeants et militants communautaires à Calpulalpam, où la société minière canadienne Continuum Resources a été forcée de fermer à cause des dommages qu'elle a causés à l'environnement de la localité, et CPUVO (comité coordonnateur des peuples unis de la vallée d'Ocotlan) à San José del Progreso, où la société minière canadienne Fortuna Silver exerce ses activités. La délégation a appris l'existence de cas présumés de corruption, de dommages à l'environnement, de meurtres et de violence physique. Le groupe a aussi rencontré des membres de Peace Brigades International ou PBI (Brigades de paix internationales) et un des trois prêtres que PBI a accompagnés au cours des quelques dernières années, Père Martin Octavio Garcia Ortiz, qui a été victime de violence physique parce qu'il participait à un projet environnemental à San José del Progreso. Finalement, la délégation a rencontré le sous-secrétaire des droits des Autochtones de l'État d'Oaxaca, Hugo Aguilar Ortiz.

La délégation a demandé des entrevues avec des représentants d'Excellon Resources et de Fortuna Silver. Excellon Resources a rejeté la demande par écrit avant l'arrivée de la délégation au Mexique et de nouveau lorsque la délégation l'a réitérée à l'entrée de la mine La Platosa. Fortuna Silver n'a jamais répondu.

Suite aux visites, la délégation a rencontré des dignitaires de l'ambassade du Canada au Mexique pour leur faire part de ses observations et de ses préoccupations à l'égard du sérieux manque de respect que témoignent Excellon Ressources et Fortuna Silver envers les travailleurs et les collectivités où elles exploitent leurs sociétés.

La délégation avait planifié de rédiger un rapport sur ses constatations, et elle le fera. Cependant, à la fin de la 10^e journée de sa visite, elle a également décidé d'écrire une lettre ouverte aux membres de la collectivité, aux propriétaires de terres communales et aux travailleurs du Mexique touchés par les activités des sociétés minières canadiennes, et en particulier aux collectivités et travailleurs qu'elle a visités à Durango et Oaxaca.

La lettre ouverte des membres de la délégation de 2013

Notre visite parmi vous a soulevé de nombreuses émotions.

D'abord, nous vous sommes profondément reconnaissants du temps que vous avez passé avec nous, de la chaleur avec laquelle vous nous avez accueillis, et de l'honnêteté, de l'ouverture d'esprit et du respect dont vous avez fait preuve à notre égard. Nous sommes touchés par votre générosité.

Vos témoignages concernant les répercussions des activités des sociétés minières canadiennes sur vous tous nous ont profondément émus jusqu'aux larmes. Après avoir écouté vos récits, nous ne doutons nullement des violations des droits de la personne qui ont eu libre cours à Durango et Oaxaca.

Nous éprouvons de la tristesse à l'idée que les espoirs et les rêves d'emplois et d'une meilleure vie pour vos enfants et vous-mêmes qu'un grand nombre d'entre vous avaient fondés sur l'exploitation minière aient été anéantis. Au lieu de procurer des possibilités à la collectivité, l'exploitation minière n'a semé que division, conflit et violence. L'accès à de l'eau potable, si vital à vos collectivités, a été perturbé. Vos espoirs ont été si profondément trahis qu'un grand nombre d'entre vous nous ont confié ne plus jamais vouloir avoir affaire avec l'exploitation minière. D'autres, après avoir entendu parler des expériences négatives d'autres collectivités, s'opposent carrément à l'exploitation minière dès le début. Vous voulez tout simplement que les sociétés minières et d'exploration canadiennes restent chez elles et vous laissent tranquilles.

Nous sommes désolés que les sociétés minières basées au Canada et qui se procurent des capitaux sur les marchés de notre pays n'aient pas daigné vous témoigner le genre de respect dont vous nous avez honoré. Plutôt, ces entreprises, en particulier Fortuna Silver et Excellon Resources, ont fait preuve d'un grand mépris à votre égard. Selon nous, elles ne se comportent pas de façons auxquelles nous nous attendrions en tant que Canadiens. Dans le cas d'Excellon, l'entreprise a trahi la confiance de la collectivité en ne tenant pas bon nombre des engagements dont elle avait convenus en 2008 dans la convention de bail intervenue entre elle-même et l'Ejido de La Sierrita. Selon notre expérience, une entreprise canadienne qui ne respecte pas les conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages avec une collectivité au Canada ferait rapidement face à des conséquences et se verrait incapable de poursuivre ses activités.

Nous sommes troublés par le fait que les travailleurs et les collectivités aient de la difficulté à tenir les entreprises et les autres intervenants responsables. Comment est-il possible qu'Excellon Resources puisse congédier près de 50 personnes tout simplement parce qu'elles veulent se joindre à un syndicat démocratique qui pourrait imposer des améliorations à la santé et la sécurité dans une mine? Comment Excellon peut-elle agir ainsi sans répercussion, laissant des mineurs sans emploi pendant plus de sept mois maintenant? Comment les pertes de vies dans la localité de San José del Progreso peuvent-elles demeurer non résolues? Les personnes qui ont perdu la vie défendaient leurs droits fondamentaux à leurs terres et à l'accès à de l'eau.

Nous avons entendu maintes et maintes fois des histoires portant sur le refus de dirigeants à tous les paliers du gouvernement mexicain de protéger les travailleurs et les collectivités, d'appliquer efficacement les lois et de mener correctement des enquêtes sur les accidents et les incidents de violence au travail. Les procédures judiciaires qui pourraient procurer la justice aux travailleurs et aux collectivités semblent compliquées, exposées à la corruption et à des pressions politiques, et elles font l'objet de longs retards. Justice différée est justice refusée. Pour nous, il est évident que la population ouvrière et les collectivités du Mexique ne peuvent accéder facilement aux mécanismes juridiques qui leur permettraient de faire valoir leurs droits ou d'être indemnisés équitablement pour les violations de leurs droits.

Il faut remédier à ce manque. Nous croyons que le gouvernement canadien peut, et devrait, mettre en place un processus permettant aux travailleurs et aux collectivités de déposer des plaintes contre les sociétés minières canadiennes, prévoyant la tenue d'enquêtes en bonne et due forme et comportant des mesures de conformité (au lieu des mécanismes de plainte volontaires qui existent actuellement sous la direction du Bureau du conseiller pour l'industrie extractive). De plus, le Canada doit faire en sorte qu'il soit plus facile pour les personnes qui ont subi des torts aux mains des sociétés minières canadiennes de les poursuivre devant les tribunaux canadiens afin d'obtenir réparation et indemnisation.

Nous louons votre détermination à créer des possibilités économiques de rechange afin de ne pas dépendre de l'exploitation minière. La cohésion communautaire, la clarté des objectifs, la créativité et la diversité des initiatives de Calpulalpam en particulier nous ont impressionnés.

Nous sommes inspirés par la solidarité et le courage dont vous faites preuve les uns envers les autres dans des circonstances où il semble que les entreprises aient tout le pouvoir, et où l'on exerce sur vous des pressions économiques et politiques dans le but de vous affaiblir et de cacher au monde entier vos revendications légitimes.

Nous nous inquiétons du fait que les expériences dont vous nous avez fait part au sujet du comportement des sociétés minières canadiennes à Oaxaca et à Durango ne constituent pas des cas qui font exception, mais qu'ils font plutôt partie d'une tendance plus vaste à l'échelle du Mexique. En effet, bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de constater par nous-mêmes ce qui se produit ailleurs, nous avons entendu des présentations sur ce qui se passe à Guerrero, Veracruz et San Luis Potosi, et nous sommes au courant de cas au Chiapas et à Chihuahua.

Tout en évaluant les stratégies qui s'offrent à nous pour réclamer du changement, nous sommes conscients du fait que bon nombre d'entre nous adhèrent et contribuent à des régimes de retraite qui détiennent des actions dans des sociétés minières canadiennes. Avons-nous la responsabilité et la possibilité d'appliquer une stratégie de militantisme actionnarial pour exiger des changements dans les pratiques des sociétés minières? Pourrait-il s'agir d'une façon de promouvoir l'adoption de politiques et de procédures proactives qui respecteraient les droits des collectivités autochtones à un consentement libre, préalable et informé?

Aux ONG, comme ProDESC, qui œuvrent pour la justice et le respect au nom des travailleurs et des collectivités, et qui en font leur lutte – nous disons : vous avez notre admiration, notre respect et notre soutien.

Aux dirigeants de Los Mineros qui sont quotidiennement confrontés à la violation systémique des droits des travailleurs dans des douzaines de lieux de travail partout au

Mexique mais qui, néanmoins, continuent de ressentir les répercussions du congédiement de chacun des membres de la section locale 309, nous disons : nous savons que vous poursuivrez la lutte pour vos membres. Nous demeurons solidaires avec vous.

Nous sommes furieux. Nous sommes furieux que les activités des sociétés minières canadiennes, qui constituaient l'objet de notre voyage, aient eu des effets aussi négatifs sur les droits au travail et les droits de la personne des travailleurs et des collectivités du Mexique.

Nous retournons au Canada et nous ramenons toutes ces émotions avec nous. Nous ramenons toute l'indignation, la tristesse et la colère que nous ressentons. À ces sentiments s'ajoutent votre espoir, votre courage et votre détermination. Grâce à eux, nous trouverons des moyens d'agir et nous raconterons vos histoires afin de veiller à faire connaître vos luttes, à faire respecter vos droits et à faire en sorte que les travailleurs et les collectivités puissent construire leurs victoires.

Joshua Berson
Marlyne Lachine
Doug Olthuis

Rob Halldorson
Walter Manning
Sharlene Patterson

Shaheen Hirani
Janette McIntosh
Laura Ramirez

Le 28 février 2013